

A LA MESA DEL SENADO

El **GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR**, al amparo de lo establecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente **MOCIÓN**, para su debate en el Pleno de la Cámara.

En las últimas semanas se suceden las rebajas en las previsiones económicas para España, a consecuencia de la reciente inestabilidad política. El Gobierno rebajó tres décimas su previsión económica por el "impacto negativo asociado a la actual situación política en Cataluña" del inicial 2,6% a un 2,3% en 2018. Asimismo, la AIREF calcula unas pérdidas de hasta un 1,2% en 2018 y el Banco de España estima que podría costar al conjunto de la economía hasta 2,5 puntos de PIB en los próximos dos años. Esta incertidumbre se manifestará en una menor confianza de consumidores y empresarios, menos gasto y aumento en la prima de riesgo. En el peor de los escenarios, podría detraer hasta un 60% del crecimiento económico nacional.

Antes de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, Cataluña lideraba el crecimiento económico de las Comunidades Autónomas. Entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, el PIB catalán avanzó 3,6%, frente a la media española del 3,1%. Igualmente, en Cataluña se creaba más empleo que la media nacional, como muestra que la afiliación a la Seguridad Social creciese un 3,8% en Cataluña, mientras que en el resto de España fue del 3,5%.

Sin embargo la incertidumbre a la que nos han conducido los independentistas está deteriorando el entorno económico catalán y entorpeciendo la recuperación económica en la Comunidad Autónoma. Así, el Banco de España ha avisado que los efectos económicos del reto independentista serán más acusados en el largo plazo en Cataluña que en las demás regiones, incluso hasta el punto de poder entrar en recesión en 2018 y poder sufrir un estancamiento futuro.

Los principales organismos económicos están ya revisando a la baja las previsiones de crecimiento de Cataluña. Dichas revisiones se ven respaldadas por el descenso en la matriculación de automóviles, el frenazo en el mercado inmobiliario catalán y una disminución de las ventas de bienes de consumo duraderos. Además las reservas hoteleras han disminuido un 30%, a lo que contribuyen los actos de turismo fobia, las huelgas y los cortes de carreteras, que deterioran la imagen de la Comunidad Autónoma

# *Grupo Parlamentario Popular en el Senado*

que recibe un mayor número de turistas. Esto está ya teniendo un impacto negativo en el empleo: uno de cada 4 desempleados en octubre es catalán. Mientras en Cataluña aumenta el paro en 14.698 personas, en las Comunidades Autónomas receptoras de sus empresas disminuye o se mantiene (Comunidad Valenciana -1.858 parados, Madrid +309 parados). Igual sucede viendo los datos de afiliación: Madrid crea 39.219 empleos netos, la Comunidad Valenciana 38.607, Andalucía 36.509 y Cataluña sólo 1.702.

Ante la inestabilidad y el desprecio a la legalidad, las empresas se trasladan fuera de Cataluña. La prosperidad y el crecimiento están directamente relacionados con la seguridad jurídica y el respeto a las leyes, que se verían sin duda conculcados en un proceso secesionista como el que se pretendía imponer.

Muchas empresas establecidas en Cataluña cambian su domicilio social y fiscal, y frenan las inversiones en esta Comunidad. La salida de más de 2.500 empresas, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España, es el paso previo a la deslocalización, más de 1.000 también han decidido trasladar su domicilio fiscal lo que producirá una reducción de los ingresos impositivos en esta Comunidad.

Además de este daño directo, el secesionismo al utilizar argumentos basados en el desprecio o el odio al resto de España está generando otros daños colaterales: las empresas catalanas, tanto si han cambiado su domicilio social a otras regiones españolas como si no, parecen estar sufriendo un boicot comercial en el resto del país por parte de algunos consumidores.

Este boicot es una respuesta social a una situación que ha llevado a algunos consumidores al hartazgo con el "procés". Es una respuesta bumerán a la división y el odio demostrado por el independentismo.

Algunos consumidores piensan que determinados directivos, accionistas de control o fundadores de esas empresas constituyen parte del movimiento independentista catalán, mediante acción directa en determinados casos, y por omisión, en otros muchos. En ocasiones y para extender ese sentimiento se han llegado a difundir en redes noticias falsas.

Pero nosotros creemos que el boicot a los productos catalanes no sólo no tiene sentido en un mundo globalizado como el nuestro, sino que tampoco tiene sentido social; de los 7,5 millones de catalanes, son una minoría los que promueven la confrontación, y no se puede abandonar a su suerte a aquellos que desean seguir formando parte de España ni hacerle pagar a ellos los errores de sus nefastos gobernantes.

# *Grupo Parlamentario Popular en el Senado*

La falta de solidaridad de los dirigentes del "procés" no se combate con falta de solidaridad del resto de españoles, sino con seny y todos los instrumentos del estado para recuperar la legalidad y defender el interés general de todos los españoles, también de los que viven en Cataluña.

El Gobierno del PP, con el apoyo del resto de fuerzas constitucionalistas, y a través de la aplicación del art.155 de la CE por el Senado está devolviendo Cataluña a la legalidad y al constitucionalismo. Nos queda a todos los españoles contribuir a la normalización económica y social; no hay que ahondar las diferencias, sino cerrar las heridas que el independentismo ha abierto. Vamos a intentar solucionar este daño, causado por unos pocos, desde la unidad de las fuerzas políticas constitucionalistas.

Debe rechazarse cualquier práctica de boicot a los productos producidos en Cataluña como forma de expresar un rechazo al secesionismo. Esta práctica comporta la misma división que el independentismo y nos aleja de este proyecto común que es España.

En un corto periodo de tiempo hemos asistido a una serie de acontecimientos excepcionales: un referéndum ilegal, una declaración unilateral de independencia y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las incertidumbres generadas, especialmente por los dos primeros, merman la confianza de los agentes económicos. Las finanzas catalanas no se sostendrían sin el apoyo del resto de la Nación y por tanto de Europa. No hay más que ver la diferencia en la calificación que otorgan las agencias de calificación a la deuda emitida por Cataluña con respecto a la del resto de España, de una España que algunos pretenden destruir, y a cuyos ciudadanos apelamos para que no se promuevan boicots. Los ciudadanos catalanes, en su gran mayoría de buena fe, no se merecen cargar con las consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos.

Por todo cuanto antecede, el **GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR** propone a la aprobación del Pleno del Senado la siguiente:

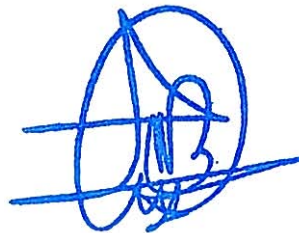
## MOCIÓN

El Senado reconoce que la actitud irresponsable de los partidos independentistas ha perjudicado la situación económica y social en Cataluña, que está afectando al crecimiento y al empleo en Cataluña, e indirectamente, en el resto de España.

# *Grupo Parlamentario Popular en el Senado*

Por ello, manifiesta la necesidad de apoyar todos los productos marca España, incluidos por ello los catalanes, sin que se ejerza ninguna discriminación ni ningún tipo de boicot hacia ellos.

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2017.



José Manuel BARREIRO FERNÁNDEZ

PORTAVOZ

/PD/